



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA POR LA QUE EFECTÚA REQUERIMIENTO A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS RELACIONADOS EN EL ANEXO A LA PRESENTE RESOLUCIÓN, PARA LA ASIGNACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS OCASIONADA POR EL COVID-19.

Vistas las cinco solicitudes presentadas en fecha 13 de abril de 2020 por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, en las que se solicita:

1. La asignación de empleados públicos de la competencia funcional de Ayudante Técnico Educativo dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que han ostentado la competencia funcional de Auxiliar de Enfermería.
2. La asignación de empleados públicos de la competencia funcional de Ayudante Técnico Educativo dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que han ostentado la competencia funcional de Cuidador Técnico Asistencial.
3. La asignación de empleados públicos de la competencia funcional de Técnico Superior de Educación Infantil dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que han ostentado la competencia funcional de Cuidador Técnico de Servicios Asistenciales.
4. La asignación de empleados públicos de la competencia funcional de Técnico Superior de Educación Infantil dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que han ostentado la competencia funcional de Auxiliar de Enfermería.
5. La asignación de empleados públicos de la competencia funcional de Médico dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

Para que de forma temporal y excepcional pasen a desempeñar funciones, tareas o responsabilidades en los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma, de la localidad de su centro de trabajo, en función de las necesidades de los centros y en aras de garantizar la atención de los residentes, mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria.

Visto el estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus posteriores prórrogas.

Vista la ORDEN PRE/339/2020, de 6 de abril, por la que se adoptan medidas en materia de asignación eficiente de recursos humanos disponibles en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus organismos autónomos ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, (BOCYL de 8 de abril)



Esta Dirección General de la Función Pública, en atención a las competencias atribuidas en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 (BOE nº 87 de 29 de marzo) y por la citada Orden PRE/339/2020, de 6 de abril,

RESUELVE

Primero. Requerir a los empleados públicos de la competencia funcional de:

.- Ayudante Técnico Educativo dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que han ostentado la competencia funcional de Auxiliar de Enfermería.

.- Ayudante Técnico Educativo dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que han ostentado la competencia funcional de Cuidador Técnico Asistencial;

.- Técnico Superior de Educación Infantil dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que han ostentado la competencia funcional de Cuidador Técnico de Servicios Asistenciales

.- Técnico Superior de Educación Infantil dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que han ostentado la competencia funcional de Auxiliar de Enfermería;

Todos ellos señalados como Anexo a esta Resolución, para pasar a desempeñar temporal y excepcionalmente, funciones, tareas o responsabilidades distintas a las que corresponden al puesto de trabajo que desempeñan, siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, hasta la finalización del estado de alarma.

En lo referente a la solicitud relativa a la asignación de empleados públicos de la competencia funcional de Médico dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, no procede efectuar el requerimiento solicitado dado que ha sido acreditado por la Consejería de Educación, que el personal señalado se encuentra en diferentes situaciones que impiden su disponibilidad para pasar a desempeñar temporal y excepcionalmente, funciones, tareas o responsabilidades distintas a las que corresponden al puesto de trabajo.

El presente requerimiento consiste en la prestación de servicios extraordinarios, ya sea en razón de su duración o de su naturaleza, en la encomienda de funciones distintas de las correspondientes a su puesto de trabajo, teniendo en cuenta la capacitación profesional. Asimismo, este requerimiento consiste en la reasignación de efectivos y



cambios de centro de trabajo, siempre dentro de la misma localidad, o área de prestación.

En el supuesto de que el requerimiento efectuado implique el desempeño de tareas o responsabilidades superiores a las del grupo profesional de pertenencia del interesado, se le retribuirá por las funciones realmente desempeñadas. En todo caso, se deberán retribuir los complementos funcionales correspondientes a la jornada realizada.

El incumplimiento o la resistencia a esta Resolución durante el estado de alarma, será sancionada conforme a las leyes, en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

Segundo. Facultar a la Gerencia de Servicios Sociales para que determine la forma más adecuada de llevar a cabo las actuaciones que sean precisas para efectuar las comunicaciones de los requerimientos a que se refiere esta Resolución a fin de conseguir una mayor celeridad y eficacia en su cumplimiento.

Tercero. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse, de conformidad con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de alzada ante la Consejería de la Presidencia en el plazo de un mes. Dicho plazo se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de la finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la presente resolución. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del presente acto administrativo. Todo ello, de conformidad con lo señalado en el apartado 1 de la Disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (BOE nº 91 de 1 de abril)

LA DIRECTORA GENERAL
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS-
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN